



De Bagdad a Caracas: un manual de Washington sobre sanciones y guerra. Por Manolo De Los Santos

Posted on Noviembre 24, 2025

Los recientes ataques aéreos estadounidenses en el Caribe y las amenazas militares contra Venezuela son una continuación de décadas (o incluso siglos) de la política estadounidense en la región, no un alejamiento de ella.

En las últimas semanas, Washington ha intensificado las amenazas y hostilidades contra Venezuela, y el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó abiertamente que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas contra el país. Estas acciones son preocupantes y representan una grave intensificación de la ofensiva bélica contra el país caribeño, además de confirmar lo que muchos han afirmado durante años: Estados Unidos está profundamente involucrado en lo que sucede en Venezuela y no teme utilizar todas las herramientas a su disposición para imponer sus intereses.

“¿Alguien puede realmente creer que la CIA no lleva ya 60 años operando en Venezuela?”, preguntó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de que Trump anunciara la autorización de la actividad de la CIA en su país.

La respuesta, analizada a través del registro histórico de dos siglos, confirma un patrón de interferencia

continúa cuyo objetivo es afirmar el dominio estadounidense sobre todo el hemisferio. Las crecientes amenazas de guerra de la administración Trump contra Caracas no representan una política nueva, sino la culminación de un proyecto de larga data de cambio de régimen, que guarda profundas y preocupantes similitudes con el impulso bélico contra Irak durante la administración Bush.

Washington siempre ha visto a América Latina y el Caribe a través de la perspectiva de la Doctrina Monroe, reservando unilateralmente la región para el dominio geopolítico estadounidense. Los últimos doscientos años confirman un patrón de intervención reiterada y agresiva. Los ejemplos recientes más notorios, donde la intervención estadounidense abarcó apoyo político, operaciones de inteligencia e intervención militar directa, incluyen el golpe de Estado de 1954 contra Jacobo Arbenz en Guatemala, la invasión de República Dominicana en 1965 que frustró el regreso de un gobierno progresista liderado por Juan Bosch, el golpe de Estado de 1973 que desmanteló el proyecto socialista de Salvador Allende en Chile, el complot de 1983 para derrocar al gobierno de Maurice Bishop y la invasión de Granada, y los repetidos derrocamientos del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en 1991 y 2004. El golpe de Estado de 2009 en Honduras contra el gobierno de Mel Zelaya continuó esta tradición.

Sin embargo, Venezuela se ha convertido en el blanco definitivo, enfrentando más intentos de cambio de régimen respaldados por Estados Unidos que cualquier otro país latinoamericano en el último cuarto de siglo. La obsesión por recuperar el control del país comenzó poco después de la elección de Hugo Chávez en 1998, una victoria que marcó un cambio radical respecto a las políticas neoliberales impulsadas por Estados Unidos y el inicio de un período de importantes transformaciones, desde la reducción de la pobreza hasta la integración regional, liderado por una ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Washington apoyó activamente numerosos esfuerzos para derrocar a Chávez, en particular un golpe militar en 2002, derrotado por un levantamiento popular, y el devastador cierre petrolero de 2002-2003, cuyo objetivo era cerrar la principal fuente de ingresos del país.

Bajo los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, se canalizaron millones de dólares para impulsar a los grupos de derecha venezolanos, a menudo carentes de base social, a una confrontación directa con el gobierno venezolano mediante tácticas que iban desde planes de asesinato hasta acciones terroristas. Esta corriente de financiación apoyó a grupos y líderes que, haciéndose pasar por la oposición democrática u organizaciones no gubernamentales, han abogado constantemente por la destitución violenta del gobierno democráticamente electo del país. Una destacada beneficiaria de fondos estadounidenses, María Corina Machado, líder de extrema derecha que recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz, construyó su carrera política sobre décadas de defensa de la intervención extranjera estadounidense e israelí.

El patrón de apoyo al cambio de régimen continuó tras la sospechosa muerte de Chávez en 2013, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre un complot de la CIA. Tras la elección de Nicolás Maduro, el gobierno de Obama respaldó una violenta ola de protestas en 2014, conocida como *guarimbas*, caracterizada por linchamientos racistas de simpatizantes negros del gobierno a manos de turbas derechistas. Maduro

enfrentó otro período prolongado de protestas violentas respaldadas por Estados Unidos en 2017. Orlando Figuera, un joven afrovenezolano de 21 años, fue atacado y quemado vivo en Caracas por activistas de la oposición en mayo de 2017.

Se intensificó el asedio económico

En 2015, el presidente Obama intensificó la presión retórica y económica al declarar a Venezuela una “amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esta acusación fue ampliamente reconocida por carecer de fundamento fáctico y fue rechazada inicialmente incluso por algunos líderes de la oposición venezolana. Sin embargo, la declaración proporcionó el pretexto legal para la imposición de sanciones, lo que desencadenó el colapso de la industria petrolera y devastó la economía venezolana.

Un año después del primer mandato de Trump, Estados Unidos impuso sanciones aún más severas, dirigidas directamente al sector petrolero venezolano. Antes de las sanciones de 2017, la caída mensual promedio de la producción petrolera era de aproximadamente el 1 %. Tras la orden ejecutiva de agosto de 2017 que bloqueó el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses, la tasa de caída se desplomó, cayendo a más del triple de la tasa anterior. Las sanciones de agosto de 2019 crearon el marco legal para confiscar miles de millones de dólares en activos extranjeros de Venezuela, y apuntaron específicamente a la petrolera estatal PDVSA y prohibieron las exportaciones al mercado estadounidense, que anteriormente absorbía más de un tercio del petróleo venezolano, lo que supuso un impacto catastrófico.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentó que estas sanciones provocaron que el Estado venezolano perdiera entre 17 000 y 31 000 millones de dólares en ingresos petroleros potenciales. Esta pérdida de divisas redujo directamente la capacidad del Estado para importar alimentos, medicamentos y productos esenciales, lo que incrementó las tasas de mortalidad y generó una verdadera crisis humanitaria. La intensificación de las sanciones estadounidenses, en particular las iniciadas en 2017, contribuyó a que Venezuela experimentara la mayor contracción económica registrada en la historia latinoamericana, con una contracción estimada del 74,3 % de su Producto Interno Bruto entre 2014 y 2021.

El manual de estrategia de Irak, actualizado: las sanciones como guerra económica

El primer gobierno de Trump aplicó una política de “máxima presión” para derrocar a Maduro, formalizando el objetivo de un cambio de régimen con una agresividad sin precedentes. Además de la aplicación de severas sanciones petroleras, también condujo al respaldo absurdo a la autodeclaración de Juan Guaidó como presidente en enero de 2019. Esto también condujo al despliegue de buques de guerra estadounidenses y a la designación del gobierno de Maduro como entidad “narcoterrorista”, haciendo eco

de los pretextos para la invasión de Irak de 2003. Esto culminó en la posterior financiación de la Operación Gedeón, una torpe invasión marítima por parte de mercenarios respaldados por Estados Unidos en mayo de 2020, que ahora se recuerda como la “**Bahía de Cochinitos**”.

Los paralelismos retóricos entre ambas campañas son sorprendentes. En 2003, la administración Bush justificó la guerra basándose en afirmaciones falsas sobre la posesión de armas de destrucción masiva (ADM) por parte de Saddam Hussein y sus presuntos vínculos con el terrorismo. De igual manera, la administración Trump ha intentado justificar acciones militares y encubiertas en Venezuela invocando la narrativa del narcoterrorismo. Ambos intentos de transformar un conflicto político en una amenaza preventiva a la seguridad que requería una respuesta militar.

Sin embargo, la similitud más profunda reside en la estrategia de estrangulamiento económico empleada contra ambas naciones. Desde 1990 hasta la invasión de 2003, se impusieron sanciones multilaterales integrales a Irak, devastando a su población civil sin lograr derrocar a Saddam Hussein. Estas medidas impusieron severas restricciones a las exportaciones petroleras iraquíes y controlaron estrictamente la importación de bienes. El resultado fue una catástrofe humanitaria, y estudios estiman que las sanciones contribuyeron a la muerte de cientos de miles de niños menores de cinco años debido a la desnutrición y la falta de agua potable y medicamentos. El exsecretario adjunto de las Naciones Unidas, Denis Halliday, quien renunció en protesta, calificó las sanciones de “genocidas”. La brutalidad de la política fue resumida infamemente por la entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright, quien, cuando se le preguntó si la muerte de medio millón de niños iraquíes “valió la pena”, respondió: “Creemos que el precio lo vale”.

Las sanciones a Venezuela, en particular las impuestas en 2019 contra la industria petrolera, replicaron esta estrategia de castigo colectivo con una severidad inicial aún mayor. A diferencia de Irak, que finalmente recibió cierto alivio a través del Programa Petróleo por Alimentos administrado por la ONU (a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y el Reino Unido por bloquear suministros humanitarios vitales bajo una lógica de “doble uso”), el gobierno venezolano se vio inmediatamente privado de su principal fuente de divisas. El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) argumentó que la naturaleza radical de las sanciones de 2019 creó un embargo comercial casi total, posiblemente “más draconiano” que las sanciones impuestas a Irak antes de la guerra, señalando la ausencia de un mecanismo humanitario comparable para mitigar la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos petroleros.

La hegemonía y el desafío ideológico

El interés de Estados Unidos en Venezuela va más allá de la simple toma de control de las mayores reservas petroleras del mundo. El objetivo principal es ideológico y político: derrocar a un gobierno independiente en Venezuela que ha sido tanto una fuente de apoyo para otros gobiernos progresistas como un obstáculo para los planes estadounidenses de imponer gobiernos de extrema derecha en la

región. El gobierno venezolano representa un núcleo de resistencia, y su derrocamiento exitoso reafirmaría el dominio de la política exterior estadounidense en la región, enviando un mensaje claro a otras naciones que consideran trazar un rumbo político y económico independiente. Por lo tanto, la amenaza de intervención no se limita a una cuestión económica, sino a la defensa de la integridad ideológica de la Doctrina Monroe en el siglo XXI.

La última ronda de escalada de hostilidad hacia Venezuela bajo el gobierno de Trump representa una fase aguda y peligrosa, marcada por recientes ataques extrajudiciales en el Caribe y amenazas explícitas de ataques terrestres. Hasta la fecha, al menos 32 personas han muerto en al menos siete ataques de este tipo desde principios de septiembre. Se ha confirmado que algunas de las víctimas son ciudadanos de Colombia y Trinidad y Tobago. El gobierno ha acusado a las víctimas de ser “narcoterroristas” sin aportar pruebas concretas, y sus familias afirman que los muertos eran pescadores .

La campaña contra Venezuela es fundamentalmente la continuación de un esfuerzo de dos siglos por mantener el control imperial sobre la región. El afán desesperado e implacable de Trump por derrocar a Nicolás Maduro, como parte de una compulsión histórica por afirmar su dominio, no solo mediante sanciones y apoyo a la agitación interna, sino ahora mediante ejecuciones extrajudiciales en el mar y amenazas de operaciones terrestres, ha llevado a la región al borde de un conflicto masivo. Una guerra de este tipo no solo sería un desastre que requeriría un vasto despliegue de tropas, sino que casi con certeza desestabilizaría a toda Latinoamérica y se extendería mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Sin embargo, la mayoría del pueblo estadounidense ha demostrado su oposición al uso de la fuerza militar para invadir Venezuela, y los senadores de California Adam Schiff y Kentucky Rand Paul presentaron una resolución bipartidista para impedir que Trump use la fuerza contra Venezuela. Sin embargo, el control definitivo de esta peligrosa aventura podría recaer en el pueblo estadounidense, que debe exigir transparencia y el fin inmediato de la marcha hacia otra guerra desastrosa.

Manolo De Los Santos es Director Ejecutivo del Foro de los Pueblos e investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Sus escritos aparecen regularmente en Monthly Review, Peoples Dispatch, CounterPunch, La Jornada y otros medios progresistas. Recientemente, coeditó Viviremos: Venezuela vs. Hybrid War (LeftWord, 2020), Camarada de la Revolución: Discursos Seleccionados de Fidel Castro (LeftWord, 2021) y Nuestro Propio Camino al Socialismo: Discursos Seleccionados de Hugo Chávez (LeftWord, 2023).